



LNR Semanario

La Nueva República



Esteban Álvarez Guerrero

Otro cubano olvidado

Esteban Álvarez Guerrero está ciego, vive en condiciones de extrema vulnerabilidad. Recibe una pensión mensual de apenas 1,500 pesos cubanos, equivalente a menos de 6 dólares al mes, lo que representa alrededor de 20 centavos diarios para cubrir todas sus necesidades básicas.

Además de su discapacidad visual total, padece múltiples enfermedades que deterioran gravemente su salud. Su casa está prácticamente destruida y según denuncia, nunca ha recibido ayuda efectiva de las autoridades locales ni de las instituciones gubernamentales correspondientes.

La escasez de recursos le impide adquirir alimentos adecuados y las pocas medicinas que ocasionalmente aparecen en el mercado. Esta situación lo expone al hambre, las carencias más elementales y un progresivo empeoramiento de su estado físico.

Por la Defensoría del Pueblo (CID) en Velasco, municipio Gibara, provincia Holguín.



Por Roxana Rodríguez, La Habana

GAESA: el capitalismo salvaje del Raúl Castro

Durante más de seis décadas, el régimen castrista predicó el socialismo marxista como un sistema destinado a eliminar la explotación económica, impedir la concentración de la riqueza y garantizar que los recursos nacionales estuvieran al servicio del pueblo. Mientras esos principios eran repetidos en escuelas, medios de comunicación y discursos oficiales, se desarrollaba silenciosamente una realidad muy diferente. Bajo la retórica de la igualdad y la justicia social se construía uno de los sistemas de concentración económica más extremos y menos transparentes de América Latina: una forma de capitalismo salvaje reservado exclusivamente para Raúl Castro y su pequeño grupo de incondicionales. Bajo su dirección surgió y se consolidó el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), una estructura que llegó a concentrar un poder económico sin precedentes en la historia contemporánea de Cuba.

La paradoja es evidente. Mientras millones de cubanos escuchaban que el capitalismo era responsable de la desigualdad y la pobreza, una organización con características propias de una gran corporación acumulaba recursos y capacidad de decisión económica en manos de un grupo extremadamente reducido de intocables.

GAESA nunca fue realmente una empresa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ni una institución al servicio del Estado cubano, como la prensa occidental repitió durante años. Fue una empresa privada al margen del Estado que administró los sectores más rentables de la economía nacional como un patrimonio propio. La imagen de un conglomerado militar sirvió para ocultar su verdadera naturaleza y otorgar apariencia de legitimidad a una estructura diseñada para concentrar poder económico fuera del

alcance de cualquier fiscalización real.

GAESA extendió su control sobre hoteles, puertos, marinas, zonas francas, remesas, comercio en divisas, inmobiliarias, transporte, logística, importaciones y servicios financieros. Ninguna otra institución del régimen acumuló semejante capacidad para decidir el destino de los recursos económicos del país.

Mientras tanto, los sectores esenciales para la población fueron abandonados. La agricultura se desplomó, la industria azucarera dejó de ser el motor económico nacional, la infraestructura energética envejeció y los hospitales comenzaron a sufrir carencias cada vez más graves. Sin embargo, miles de millones de dólares continuaron siendo dirigidos a hoteles y proyectos turísticos mientras la economía nacional se hundía.

Las consecuencias son visibles hoy. Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia. La escasez de alimentos, medicamentos, combustible y electricidad afecta diariamente a millones de ciudadanos. Mientras el régimen exigía sacrificios en nombre del socialismo, construía una estructura destinada a concentrar riqueza, privilegios y poder en manos de usurpadores.

La historia de GAESA es la historia del capitalismo salvaje en Cuba. No del capitalismo basado en la libre competencia, sino de un capitalismo de privilegios, monopolios y poder político absoluto. Mientras se hablaba de igualdad, una pequeña pandilla concentraba el control de los recursos nacionales sin supervisión ni rendición de cuentas. En ese proceso se traicionó al pueblo cubano y también a los principios que el régimen decía defender. La dictadura marxista-leninista fue impuesta al pueblo; el capitalismo salvaje quedó reservado para Raúl Castro y su reducido grupo de incondicionales.

Por InfoCID



Marco Rubio

Luiz Inácio Lula da Silva

¿Quién es el verdadero líder latinoamericano “frustrado”? ¿Lula o Marco Rubio?

Lula da Silva calificó recientemente a Marco Rubio como un “latinoamericano frustrado”. La frase generó titulares y abrió un debate que va mucho más allá de una simple confrontación verbal entre dos figuras políticas. La pregunta que surge es inevitable: ¿quién representa realmente la frustración política en la América Latina actual?

La democracia no se mide únicamente por la capacidad de ganar elecciones. También se mide por la disposición de sus líderes a defender principios universales, especialmente cuando hacerlo resulta incómodo o políticamente costoso. La libertad, los derechos humanos y la dignidad humana no pueden ser valores aplicables solo a determinados gobiernos o ideologías.

Durante décadas, Luiz Inácio Lula da Silva fue considerado uno de los líderes más influyentes de América Latina. Su ascenso desde los movimientos sindicales hasta la presidencia de Brasil inspiró a millones de personas. Además, fue presentado internacionalmente como el símbolo de una izquierda democrática capaz de combinar crecimiento económico con inclusión social.

Sin embargo, su trayectoria regional también quedó marcada por su estrecha relación política e ideológica con regímenes autoritarios. Su amistad con Fidel Castro, su papel en la creación del Foro de São Paulo y su constante defensa de gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua generaron crecientes cuestionamientos. Mientras organizaciones internacionales denunciaban presos políticos, censura y persecución a opositores, Lula evitó condenas claras y, en numerosas ocasiones, minimizó las críticas.

El caso cubano resulta especialmente significativo. Durante años, Lula mantuvo una posición de respaldo político hacia el régimen de La Habana. Incluso cuando la comunidad internacional denunciaba violaciones sistemáticas de derechos humanos, su respuesta fue generalmente la de justificar o relativizar

las acusaciones. Para muchos defensores de la democracia, esa actitud representó una contradicción entre el discurso democrático y la práctica política.

La relación tampoco fue únicamente ideológica. Durante sus gobiernos, Brasil financió importantes proyectos en Cuba, entre ellos la ampliación del Puerto de Mariel. Aunque sus defensores argumentan que se trató de una inversión estratégica, numerosos brasileños cuestionaron el uso de recursos respaldados por el Estado para beneficiar a una dictadura extranjera mientras persistían necesidades urgentes dentro de Brasil.

Por otra parte, Marco Rubio ha construido su carrera política sobre una posición firme contra las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sus críticos pueden discrepar de sus métodos o de determinadas políticas estadounidenses, pero difícilmente pueden acusarlo de ambigüedad frente a los regímenes autoritarios de la región. Rubio ha mantenido durante años una postura consistente en defensa de las libertades políticas y los derechos fundamentales.

La verdadera frustración política no consiste en defender principios democráticos. Surge cuando un proyecto histórico que prometía justicia, libertad y progreso termina asociado al autoritarismo, la corrupción y la pérdida de credibilidad moral. En gran medida, eso es lo que ocurrió con buena parte de la izquierda latinoamericana que Lula ayudó a impulsar.

Por ello, la historia podría llegar a una conclusión diferente a la sugerida por Lula. Si existe un líder latinoamericano frustrado, quizás no sea quien denunció a las dictaduras, sino quien vio cómo el proyecto político continental que promovió durante décadas perdió gran parte de su prestigio y de la confianza de millones de ciudadanos. Al final, los líderes son recordados no por sus discursos, sino por los principios que decidieron defender cuando hacerlo tenía un costo político real.

Opinión

Putin y el mayor error estratégico del siglo XXI

Uno de los mayores riesgos para cualquier líder es enamorarse de la historia que desea protagonizar. Vladimir Putin parece haber caído en esa trampa. Admirador de gobernantes que expandieron el poder ruso y dejaron una huella duradera en la historia, desde Pedro el Grande hasta Stalin, terminó viendo su papel no como el de un administrador temporal del Estado, sino como el de un hombre destinado a restaurar la grandeza de Rusia. Como ocurrió con otros líderes antes que él, la admiración por las figuras del pasado pudo haber terminado nublando su capacidad para evaluar con objetividad los riesgos del presente.

La invasión de Ucrania fue mucho más que una operación militar. Fue una apuesta geopolítica destinada a demostrar que Estados Unidos ya no podía imponer su voluntad al resto del mundo. Una rápida victoria rusa habría humillado a Washington, debilitado la credibilidad de sus alianzas y consolidado la asociación estratégica entre Rusia y China como alternativa al orden internacional liderado por Estados Unidos. Para Putin, el triunfo en Ucrania debía convertirse en el acontecimiento que lo colocara entre los grandes protagonistas de la historia rusa.

Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. La invasión fortaleció a la OTAN, provocó el ingreso de Finlandia y Suecia en la alianza, consolidó la cooperación militar occidental y aceleró el rearme europeo. También expuso debilidades inesperadas de las fuerzas armadas rusas y ofreció a Estados Unidos una oportunidad estratégica excepcional.

En abril de 2022, el entonces Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró que Washington quería ver a Rusia “debilitada hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania”. Lo que Putin esperaba que fuera una demostración de fuerza terminó convirtiéndose en una guerra de desgaste que permitió a sus adversarios erosionar gradualmente el poder militar y económico ruso.

Los recientes ataques ucranianos contra San Petersburgo, bases aéreas, fábricas de armamento, refinerías e infraestructuras energéticas dentro de Rusia reflejan hasta qué punto han cambiado las circunstancias desde 2022. Lejos de enfrentarse a una Ucrania derrotada, Putin se enfrenta hoy a un país más experimentado, más innovador y respaldado por gobiernos que consideran fundamental impedir una victoria rusa.

Cada ataque contra objetivos que antes parecían intocables recuerda una realidad incómoda para el Kremlin: la guerra que debía demostrar la decadencia de Occidente terminó fortaleciendo a sus adversarios. La historia decidirá si Putin será recordado como el hombre que restauró la grandeza de Rusia o como el líder que, en su intento de desafiar a Estados Unidos y cambiar el orden mundial, provocó uno de los mayores errores estratégicos del siglo XXI.

14y medio: Entrevista de Yunior García a Eduardo López-Collazo-



Eduardo López Collazo, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja

Una propuesta para la salud en una Cuba democrática

Eduardo López-Collazo es uno de los científicos cubanos más reconocidos internacionalmente. Formado como físico nuclear y doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado una destacada carrera en España como investigador en inmunología, cáncer y respuesta inmune. También dirigió el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz de Madrid, una de las instituciones biomédicas más importantes del país.

López-Collazo rechaza la idea de una privatización total y propone un modelo sanitario universal con una fuerte base pública, similar al español. Considera que la salud debe seguir siendo accesible para todos, pero gestionada con transparencia, descentralización, supervisión independiente y espacio para iniciativas privadas reguladas.

Para el científico, la prioridad inmediata no es construir hospitales ni comprar equipos médicos, sino recuperar la transparencia. Afirma que ninguna reforma

será posible sin datos fiables sobre enfermedades, mortalidad, disponibilidad de medicamentos y estado real de las instituciones. "Lo primero es saber la verdad", sostiene.

Reconoce que Cuba desarrolló programas exitosos de vacunación, medicina familiar y vigilancia epidemiológica, pero considera que esos logros fueron exagerados por la propaganda oficial. Según explica, la imagen de Cuba como una potencia médica estuvo basada en éxitos parciales ocultando graves deficiencias.

Asimismo, señala que la falta de transparencia, el deterioro hospitalario, la escasez de medicamentos, la emigración masiva de profesionales y el colapso de gran parte de la infraestructura científica han debilitado profundamente el sector. Describe a Cuba como un paciente con "fallo multiorgánico" pero cree que una transición democrática basada en la verdad, la profesionalización y la recuperación del talento permitiría iniciar la recuperación del sistema sanitario nacional.

Patria, Pueblo y Libertad

LA PURGA: Ninguna democracia puede construirse sobre la impunidad

La historia demuestra que los grandes cambios dentro de los sistemas comunistas rara vez han ocurrido sin una purga previa de quienes controlaban el poder. Desde la Unión Soviética hasta Europa del Este, las transformaciones estuvieron precedidas por la salida o desplazamiento de figuras convertidas en obstáculos para cualquier reforma. Cuba no será una excepción.

El país enfrenta una profunda crisis económica y social. Décadas de incompetencia, corrupción y represión han llevado a la nación a una situación límite. Sin embargo, el principal obstáculo para el cambio no es únicamente el fracaso del sistema, sino la permanencia en el poder de quienes lo construyeron, defendieron y aprovecharon.

Dentro de las instituciones existen militares y funcionarios que comprenden que el modelo actual es insostenible y que una transición democrática resulta inevitable. Otro grupo minoritario se opone a cualquier transformación porque sabe que tendría que responder por décadas de abusos, corrupción, represión y destrucción económica.

Por esa razón, toda transición democrática en Cuba requerirá una purga política e institucional. No una purga basada en la venganza, sino en la responsabilidad. Quienes participaron en violaciones de derechos humanos, actos represivos o decisiones que contribuyeron al desastre nacional no pueden seguir ocupando posiciones de autoridad.

El pueblo sabe quiénes son y los Estados Unidos ya han identificado públicamente a algunos de esos funcionarios y militares, imponiéndoles sanciones.

La cuestión no es si habrá una purga, sino cómo se realizará. Una transición pacífica exige separar del poder a quienes bloquean el cambio y someter a la justicia a quienes cometieron delitos. Ninguna democracia puede construirse sobre la impunidad.

El CID ha sostenido desde su fundación que la unión entre el pueblo y los militares puede evitar la violencia y abrir paso a un gobierno provisional. Sin una depuración de las estructuras de poder responsables del desastre nacional, no habrá democracia. Solo la continuidad de los mismos responsables bajo nuevos nombres.



Sherritt International

Declaración oficial del Partido Cuba Independiente y Democrática (CID)

Sherritt suspende sus actividades en Cuba, pero no puede suspender sus responsabilidades

La reciente decisión de Sherritt International de suspender su participación directa en sus empresas mixtas en Cuba no pone fin a la historia de esta compañía en nuestro país. Por el contrario, abre una etapa en la que deberán examinarse las responsabilidades derivadas de más de tres décadas de operaciones mineras y energéticas desarrolladas en asociación con la dictadura castrista.

Según informó "The Wall Street Journal", Sherritt inició la suspensión de parte de sus operaciones y la repatriación de personal extranjero tras la ampliación de las sanciones estadounidenses contra el régimen castrista. La propia empresa reconoció que las nuevas circunstancias afectaban significativamente su capacidad para continuar operando. Sin embargo, abandonar operaciones no elimina las consecuencias de las actividades que durante años generaron beneficios económicos para la compañía y sus accionistas.

La legislación canadiense ha evolucionado en materia de responsabilidad corporativa internacional. La decisión de la Corte Suprema de Canadá en el caso "Nevsun Resources Ltd. v. Araya" confirmó que empresas canadienses pueden enfrentar reclamaciones por daños relacionados con actividades realizadas en el extranjero al permitir que víctimas de presuntos abusos laborales en Eritrea presentaran reclamaciones contra una empresa minera canadiense ante los tribunales de Canadá.

Este precedente posee una importancia extraordinaria para Cuba.

Durante décadas, Sherritt no fue un inversionista pasivo. La propia empresa ha reconocido que participó directamente en operaciones integradas de extracción mediante asociaciones con empresas estatales

cubanas, procesamiento y refinación de níquel y cobalto mediante su empresa conjunta Moa con la estatal cubana General Nickel Company.

Asimismo, mantuvo una participación significativa en Energas, una empresa mixta controlada conjuntamente con entidades estatales cubanas que llegó a generar aproximadamente el 10% de la electricidad nacional. Aunque la compañía la describía como un 'productor independiente de energía', toda su operación dependía de acuerdos con organismos estatales cubanos y su producción era vendida íntegramente a la red eléctrica del régimen.

La compañía obtuvo beneficios de la extracción y procesamiento de níquel y cobalto en Moa, así como de proyectos energéticos vinculados al sistema eléctrico nacional. Esos ingresos formaron parte de sus resultados financieros durante décadas.

También debe analizarse el impacto institucional de su presencia. Diversas fuentes han señalado que Sherritt contribuyó a la formación de cuadros empresariales y estructuras de gestión dentro del sistema económico estatal cubano. Esta realidad adquiere especial importancia al tratarse de un país sin sindicatos independientes, tribunales imparciales ni mecanismos efectivos de supervisión pública.

Durante todo el período en que Sherritt operó en Cuba, los trabajadores carecieron de libertad sindical efectiva y las comunidades afectadas por las actividades industriales no dispusieron de vías independientes para reclamar por posibles daños ambientales o sanitarios. La ausencia de reclamaciones judiciales en Cuba no demuestra la inexistencia de perjuicios; refleja la falta de instituciones capaces de investigarlos.

El Partido Cuba Independiente y

Democrática considera que una futura Cuba democrática tendrá la obligación de investigar de forma independiente las consecuencias económicas, ambientales y sociales derivadas de estas operaciones. Entre otros aspectos, deberán evaluarse los posibles daños ambientales en la región de Moa, las afectaciones a la salud pública y las condiciones laborales bajo las cuales se desarrollaron estas actividades.

Asimismo, cualquier empresa o inversionista que asumiera en el futuro el control total o parcial de estos activos deberá actuar con plena transparencia y respetar los más altos estándares internacionales de protección ambiental y responsabilidad corporativa. Ninguna transferencia de propiedad puede utilizarse para ocultar o diluir responsabilidades que deban ser determinadas mediante investigaciones independientes.

Por esta razón, el Partido Cuba Independiente y Democrática informa que prepara comunicaciones formales dirigidas al Gobierno de Canadá, a miembros del Parlamento canadiense y a despachos jurídicos especializados en responsabilidad corporativa, derechos humanos y litigios ambientales internacionales, con el propósito de preservar posibles vías futuras de investigación y reclamación.

Sherritt puede suspender operaciones, reorganizar estructuras corporativas o transferir participaciones a nuevos inversionistas. Pero ninguna de esas decisiones modifica lo ocurrido durante más de treinta años de operaciones realizadas en asociación con la dictadura castrista.

Las actividades pueden terminar. Las responsabilidades permanecen.